

Departamento de América Latina y el Caribe

Coordinadoras: **Laura Lucía Bogado Bordazar, Laura Bono**

Presentación

A) Panorama general de la región latinoamericana.

América Latina y el Caribe es la región menos equitativa del planeta, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para quién además la inequitativa distribución de la riqueza en la región sigue siendo el principal obstáculo para la erradicación de la pobreza. En América Latina, 222 millones de personas viven en condiciones de pobreza y 96 millones, que representan el 18,6 % de la población, viven en situación de indigencia.

Esta situación, implica que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe no podrán cumplir con la meta de reducir la pobreza a la mitad para el año 2015, establecido en los objetivos de desarrollo del milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del año 2000 y seguirá rezagada en este objetivo principal, a pesar de que en los últimos cinco años se han producido avances en el cumplimiento de algunos de los objetivos del milenio, tales como: el combate del hambre, la mejora de la equidad de género y educativa, la reducción de la mortalidad infantil y la mejora del acceso a vivienda y agua potable. Evidentemente los gobiernos de América Latina deben poner más énfasis en desarrollar políticas económicas y sociales más eficientes que tiendan a mejorar la redistribución del ingreso en la población y contribuir a la reducción de la pobreza. Un caso representativo de la "ineficacia" de la aplicación de políticas sociales es el de Perú, cuya economía si bien ha registrado (hasta el 2005) más de 40 meses consecutivos de crecimiento, pronosticando un porcentaje del 4,8 % para el 2005 y 2006 y 5 % para el 2007 de crecimiento en el PBI, el 54 % de la población vive en la pobreza, con menos de dos dólares por día, con reducidas posibilidades de revertir esta situación.

A esta paradójica realidad, con recuperados índices de crecimiento económico para América Latina durante el 2004 (promedio de 4,5 % anual) y mejores pronósticos de crecimiento para el 2005 (alrededor del 5 %), se suman problemas comunes que han sufrido los países latinoamericanos con respecto a las crisis en los sistemas políticos que han generado situaciones vulnerables de gobernabilidad y cuyo factor fundamental es la dificultad que han tenido para adaptarse a las circunstancias económicas y políticas que ha planteado la globalización en las últimas décadas y fundamentalmente los programas económicos proteccionistas y las políticas aislacionistas aplicadas por los países desarrollados.

Asimismo, el peso de la deuda externa de la región, que representa alrededor del 43%¹ del producto de la misma, sigue implicando para algunos países un retroceso hacia la recuperación y estabilización económica. Del mismo modo, los altos índices de inflación, que rondan el 10 % anual, se presentan en la región como un factor de desestabilización

¹ Estudio realizado por el Dresdner Bank, julio 2004. Según este estudio, en el 2004 la deuda externa de la región alcanzó la suma de U\$ 776.000 millones de dólares, siendo Brasil, México y Argentina (en ese orden) los mayores deudores de América Latina y el Caribe

y de difícil control por parte de los gobiernos, que afecta directamente al poder adquisitivo de la población, produciendo el deterioro de los ingresos.

Con el objetivo de reducir la pobreza los gobiernos de la región han implementado políticas sociales en beneficio de los sectores de la sociedad más empobrecidos y con menos posibilidades de reinserción laboral, que en los hechos actúan como "subsidios", tal ha sido el caso de las políticas desarrolladas en Argentina (Plan Jefas y Jefes de Hogar), en Brasil (Plan Hambre Cero) o en Uruguay (Plan de emergencia).

El problema del empobrecimiento de las sociedades y el de la seguridad, se han constituido en los temas centrales de las políticas aplicadas por los gobiernos de la región, problemáticas que también son llevadas por los países de América Latina y el Caribe a los foros multilaterales regionales e internacionales. En este sentido, para la IV Cumbre de las Américas que tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata en el mes de noviembre de 2005 y que reunirá a 34 Jefes de Estado de América Latina y el Caribe, los mismos han aprobado como lema principal del encuentro "Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática", como forma también de poder transformar las políticas de "subsidios sociales" en políticas concretas de trabajo. Este lema se presenta como continuador de los compromisos asumidos en la Cumbre Extraordinaria de Monterrey realizada en el mes de enero de 2004, especialmente en lo que respecta al capítulo sobre "Desarrollo Social" de la Declaración de Nueva León, donde se estableció la necesidad de impulsar políticas que fortalezcan los sistemas de seguridad social; la inclusión social, así como también la instrumentación de redes para atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. Otro aspecto relevante de la Cumbre es que se prevé la realización de una sesión especial de los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de América con la Sociedad Civil, lo que contribuirá al fortalecimiento del diálogo y a la interconexión entre los gobiernos y los sectores fundamentales de las sociedades de la región y como dice Cándido Grzybowski, "afianzar la democracia pasa necesaria e indispensablemente por la sociedad civil, sobre todo por la posibilidad de volver visibles a los invisibles".²

B) Situación Política de la Región

Dos graves crisis políticas han azotado a la región durante el 2004 y lo que va del 2005 en Bolivia y Ecuador, situaciones en las cuales se ha percibido un claro "enfrentamiento" entre la sociedad y la clase política, dejando al descubierto la debilidad de ambos sistemas democráticos y la imposibilidad de los gobiernos de garantizar el avance hacia la igualdad de derechos de los ciudadanos y de favorecer el acceso a una vida digna.

Situación de Bolivia. Bolivia, uno de los países más pobres de Sudamérica, ha sufrido en los últimos tiempos una grave situación de inestabilidad política, social e institucional. Desde la renuncia del presidente Sánchez de Lozada, la expectativa de este pueblo se encontraba depositada en quien fuera su vicepresidente Carlos Mesa. Sin perjuicio de ello, y ante la falta de un escenario que presentara cambios políticos de envergadura; continuaron produciéndose protestas y cortes de rutas en todo el país, encabezadas por los dirigentes de izquierda y representantes de los defensores de los pueblos indígenas. En ellas se reclamaban o exponían diversos puntos de vista sobre temas como la nacionalización de los yacimientos de hidrocarburos (gas y petróleo) así como la

² Grzybowski Cándido, *La Democracia en América Latina*, PNUD, abril 2004, pág. 123.

regularización de la privatización en torno al agua potable que abastece grandes poblaciones de este país.

Rodeado de este contexto político y social, el presidente Carlos Mesa decidió presentar, en marzo de 2005, su renuncia al cargo ante el Parlamento Boliviano. Ante esta decisión los dirigentes de izquierda liderados principalmente por el representante del MAS -Evo Morales- deciden rechazar la dimisión del mandatario. Ello teniendo en consideración la grave situación reinante y principalmente preocupados por que en la línea sucesora a la presidencia se encontraba en primer lugar el presidente del Senado, claro defensor de los intereses de las multinacionales. De esta manera el presidente Mesa logra conseguir, al menos en ese momento, una relegitimación de su mandato y una tregua con los sectores más conflictivos.

En este tiempo de gracia, se presenta a discusión en el Parlamento la nueva y conflictiva Ley de Hidrocarburos, cuyo proyecto fue elaborado por el Poder Ejecutivo. La misma contemplaba una profunda modificación a la legislación vigente, la cual había sido sancionada en los últimos días de la presidencia de Sánchez de Lozada. Esta legislación dispuso -en su momento- la privatización total de la actividad. La propuesta del actual oficialismo confrontaba directamente con los intereses de las empresas petroleras.

Los países de la región -especialmente Argentina, Brasil, Perú y Chile- se encontraban realmente preocupados con la situación, no solo por la inestabilidad institucional y democrática, sino también por la necesidad que los mismos tienen en el abastecimiento de gas boliviano para poder profundizar sus políticas productivas y reducir los efectos de la grave crisis energética sufrida en la región. Cabe destacar por ejemplo, que Petrobras es la empresa más grande que opera en Bolivia y que Argentina espera poder contar con la construcción de un gasoducto en el norte del país que incrementaría notablemente el abastecimiento de gas e indirectamente esto también beneficiaría a Chile quien depende de la importación de gas desde el país trasandino.

Promulgada la nueva ley (18/05/05), gracias a la cual el Estado se quedaría con el 50% de los réditos por el gas extraído (entre impuestos y regalías), la oposición de izquierda reclamó la necesidad de la nacionalización de los hidrocarburos y el llamado a una Asamblea Constituyente. Ante la negativa del gobierno de acceder a estos reclamos, la situación se tornó crítica y el país se vio paralizado entre marchas y cortes de rutas.

Así, el 6 de junio, el presidente Mesa presenta nuevamente su renuncia indeclinable, alegando que no podía permanecer más en el "Palacio Quemado", ya que ello ponía en riesgo la vida y la paz de los bolivianos. Tras el anuncio de su dimisión, asume la presidencia en forma interina el Sr. Eduardo Rodríguez Veltzé, Presidente de la Corte Suprema, luego de la renuncia a la sucesión de los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados. El nuevo mandatario no tardó en anunciar que en noviembre o diciembre de 2005 se llevarán a cabo elecciones para la renovación de los cargos legislativos que en su mayoría son de tendencia neoliberal, conjuntamente con la elección de presidente; ello en busca de la legitimación de los poderes constitucionales del país.

Como es de notar, este país rico en sus aspectos naturales, se ve a lo largo de toda su historia (primero fue la plata, luego el estaño y ahora el gas), sometido a los intereses de otros actores tanto locales como internacionales. Cabe destacar, que la mayoría de su población, de origen indígena y sumergida en la más cruel pobreza, no tiene acceso, entre otras cuestiones, al gas natural, teniendo que abastecerse de gas en garrafas o directamente de la leña.

Lamentablemente parece ser que este círculo de pobreza, intereses y postergación en torno a este país y su pueblo volverá a repetirse a lo largo del tiempo. La existencia de "dos Bolivias" (una indígena y otra "blanca o conquistadora") tiende a profundizar las divergencias y la crisis de este pueblo, sin que los responsables políticos y sociales se den cuenta que ambas Bolivias necesitan ser una, acordando un futuro mejor y en paz, siendo que el progreso y la estabilidad de una parte llevará sin dudas al mejoramiento de la otra.

Situación en Ecuador: La crisis político-institucional ecuatoriana comenzó con el reemplazo, por parte del Poder Ejecutivo de 27 de los 31 jueces de la Corte Suprema sobre fines de 2004, cuya decisión de anular los juicios de corrupción que recaían sobre los ex presidentes Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dahik, decisión que promovió el posterior regreso a Ecuador del exilio de los ex mandatarios, fue el principal desencadenante de los hechos de violencia y revueltas sociales, que llevó al pueblo ecuatoriano a las calles en señal de protesta y a exigir la renuncia del presidente Lucio Gutiérrez. El súbito cambio en la Corte Suprema provocó desconfianza en el pueblo ecuatoriano que percibió la influencia del partido de Bucaram (Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE) y del partido que dirigía Noboa (Partido Renovador Institucional Acción Nacional, PRIAN), detrás de la reforma.

La persistencia de la movilización callejera provocó, por mayoría del Congreso Nacional la destitución de los 27 jueces nombrados por el presidente Gutiérrez, pero a pesar de la medida adoptada los manifestantes marcharon por las ciudades de Ecuador, centrando la presión en la ciudad de Quito, donde la protesta cercó las inmediaciones del Congreso y del Palacio de Gobierno, pidiendo la dimisión del titular del Ejecutivo. Situación que se agravó hasta que el día 20 de abril de 2005, el presidente Lucio Gutiérrez fue detenido cuando intentaba salir del país rumbo a Chile o Panamá, donde tenía previsto pedir asilo político, tras haber ordenado a las Fuerzas Armadas y a la Policía reprimir a los manifestantes.

En este contexto de desestabilización y conflicto social, el vicepresidente Alfredo Palacio asumió la presidencia de Ecuador, luego que una mayoría opositora en el parlamento destituyera del cargo a Lucio Gutiérrez. La decisión fue tomada con 60 votos de los 62 legisladores presentes.

La grave crisis que enfrentó el pueblo ecuatoriano, que finalizó con el derrocamiento del presidente, ha sido la culminación de un largo período de desequilibrio político-institucional que llevó a la presidencia a cinco mandatarios en una década y que culminó con la caída de tres de ellos por presión popular, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (Bucaram, Mahuad y Gutiérrez). Esta situación da cuenta de la existencia de un pueblo que ante la presión de sus dirigentes políticos ha reaccionado conjuntamente en defensa de sus derechos políticos y sociales.

América Latina y la reforma al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: La composición actual del Consejo (15 miembros, 10 de los cuales tienen el carácter de no permanentes y 5 permanentes: China, Rusia, EEUU, Reino Unido y Francia), refleja la realidad internacional que imperaba luego de la Segunda Guerra Mundial, época en la cual se conformó dicho órgano de seguridad. En la actualidad, sesenta años después y teniendo en cuenta acontecimientos tales como la finalización de la Guerra Fría y la aparición de nuevos actores de poder en el contexto internacional, se impone al menos el planteo de la necesidad de la reforma a la estructura y funciones de las Naciones Unidas.

En lo referente a la composición y funcionamiento del Consejo de Seguridad, cabe señalar que el mismo Secretario General, Kofi Annan, ha reconocido la necesidad de la reforma y basándose en ello no han sido pocas las propuestas que se han presentado.

En consecuencia se ha conformado un grupo de presión llamado el Grupo de los Cuatro (G-4), integrado por Brasil, Alemania, Japón e India, a través del cual los citados países buscan un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, con el fin de mejorar la representatividad y legitimidad de las decisiones que toma este órgano político por excelencia en el seno de ONU y que tiene como objetivo fundamental el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

De llevarse a cabo la propuesta que este grupo impulsa, el Consejo de Seguridad pasaría a tener 10 asientos permanentes con derecho a veto -postulándose para el quinto lugar un país africano, el cual podría llegar a ser Nigeria- y se prevé además aumentar de 10 a 14 el número de asientos no permanentes, lo que conformaría un total de 24 miembros. Claro que esta reforma a la Carta necesita inevitablemente de los votos afirmativos de la totalidad de sus actuales miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, lo que conlleva a afirmar que no será nada fácil seguir adelante con la misma.

En lo que respecta a la región de América Latina, esta propuesta tiene defensores y detractores. En este último grupo se encuentran Argentina y México, al considerar que esta reforma elevaría a Brasil a una posición hegemónica en la región, y además consideran que la permanente rotación en las bancas no permanentes del Consejo de Seguridad traería aparejado un cierto equilibrio que se vería resquebrajado de alterarse esta postura. Es por ello que el Canciller argentino, Rafael Bielsa, consideró a la propuesta brasileña como "elitista y poco democrática".

La propuesta argentina, respaldada por México y en contraposición a la de Brasil, es la de establecer una banca permanente en el Consejo de Seguridad para América Latina en la cual se rotarían los países de la región para su ocupación.

La discusión de una reforma de tal magnitud seguramente implique un prolongado debate en el ámbito internacional, y en plano regional finalmente se terminará por definir una clara división política entre los países que apoyan la postura liderada por Brasil por un lado y por la Argentina y México por otro, posiciones ambas que parecen ser irreconciliables, lo cual podría implicar a la larga un serio perjuicio para América Latina.

Elecciones en Uruguay. En octubre de 2004 las elecciones presidenciales de Uruguay dieron ganador al Dr. Tabaré Vazquez, líder de la coalición socialista y de izquierda Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría (EP-FA-NM). Luego de los comicios y con el nuevo gobierno en ejercicio, Uruguay se mantiene en la región como un país que sostiene su tradición de "credibilidad institucional" y de ser respetuoso de los compromisos regionales e internacionales asumidos. Credibilidad que implica reconocer la fortaleza del país en cuanto a su institucionalidad, a sus valores democráticos, como a su política exterior respecto de los países de la región y del resto del mundo. El cambio de un signo ideológico no modificó las expectativas del mundo y de la región con respecto a Uruguay. En efecto durante todo el 2004, aunque las encuestas anunciaban el triunfo de la izquierda por primera vez en 174 años de vida independiente, todas las variables macroeconómicas demostraban signos de estabilidad. En este sentido y mencionando la situación monetaria de Uruguay, observamos que en lugar de apreciarse y debilitarse la moneda nacional, como ha ocurrido en otros procesos electorarios en América Latina, la circunstancia se dio a la inversa, pues se apreció significativamente la moneda uruguaya y

se depreció el dólar. Teniendo en cuenta otras variables macroeconómicas, se mantuvo una baja tasa de inflación de un dígito, hubo récord de exportaciones durante el segundo semestre de 2003 y todo el 2004 (mas de 3.000 millones de dólares) y finalmente el índice de crecimiento económico pasó del 3% en diciembre de 2003 al 12% en diciembre de 2004. Las inversiones en el 2004 se incrementaron, respecto de la reducción experimentada tras la crisis de 2002 y sus proyecciones para el 2005 son ascendentes.

En este orden, se perciben signos de coincidencia política e ideológica entre el presidente electo Tabaré Vazquez y los mandatarios de los dos socios mayoritarios del MERCOSUR, Argentina y Brasil, así como también del gobierno del presidente Ricardo Lagos, país asociado a la integración, lo cual seguramente implicará un mayor acercamiento entre los países del bloque en el ámbito bilateral y en el marco del MERCOSUR. Esta consigna se mantuvo como una de las principales estrategias de política exterior del programa de gobierno presentado durante la campaña electoral del Dr. Vazquez y fue reafirmada en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa que le tomó juramento el 1° de marzo de 2005: "el gobierno que hoy asume quiere más y mejor MERCOSUR. Un MERCOSUR ampliado, redimensionado y fortalecido que será a su vez una plataforma más sólida para lograr una mejor inserción internacional tanto del bloque en sí como de todos sus integrantes". Por otro lado, el nuevo gobierno de Uruguay ha dado señales de apoyo al proyecto de comunidad sudamericana, fuertemente impulsado por Brasil, Argentina y Venezuela, como el proceso más ambicioso tendiente a alcanzar la convergencia de las sociedades sudamericanas.

Elecciones en la Secretaría General de la OEA: En abril de 2005 tuvo lugar la elección del Secretario General de la OEA, la cual finalizó con la proclamación del Ministro del Interior chileno, José Miguel Insulza como Secretario General del organismo por los próximos cinco años, tras la renuncia a la candidatura del canciller mexicano Luis Ernesto Derbez, que contaba con el respaldo de Estados Unidos.

La elección a la Secretaría General puso fin a uno de los períodos más polémicos de la historia del foro regional, luego de la renuncia del anterior Secretario General, el ex presidente de Costa Rica Miguel Angel Rodríguez, tras haber sido acusado de corrupción en su país y por el complejo y dilatado proceso de elección del nuevo titular de la organización.

El nuevo Secretario General de la OEA, afirmó que el organismo debe focalizar su trabajo en el fortalecimiento del sistema democrático, la gobernabilidad, los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad regional. Recalcó la necesidad de "entender estos desafíos, la nueva realidad regional y global y así abordar los problemas concretos que nuestra gente ha sufrido por décadas y nosotros hemos sido ineficaces en solucionar".

Así tal como lo manifestó el nuevo Secretario General, se espera para el próximo quinquenio que el Organismo regional promueva el cumplimiento de sus objetivos institucionales establecidos, pero fundamentalmente que pueda ser capaz de aceptar también los nuevos designios y desafíos que se imponen en la realidad regional.

Finalmente, en lo que responde a la actual circunstancia política de América Latina y a pesar de las situaciones de crisis institucionales que han recaído sobre algunos de los países de la región en el último año, los diferentes gobiernos han dado claras señales de cooperación mutua en la resolución de los conflictos ocurridos en el continente. Podemos citar el ejemplo de la coordinación de esfuerzos de los diferentes gobiernos, con el respaldo de la OEA y del Grupo de Río en apoyo de Haití, donde el establecimiento de la

fuerza de paz a principios de 2004, supervisada por las Naciones Unidas, ha sido la principal expresión de esta cooperación. En este sentido, América Latina ha asumido recientemente dos grandes compromisos con el país caribeño, en primer lugar el de aumentar la contribución regional de efectivos militares para que la fuerza de paz pueda garantizar la seguridad del país y en segundo lugar, desarrollar proyectos de reconstrucción que traigan aparejado un beneficio directo a la población para finalmente crear las condiciones necesarias para promover las elecciones presidenciales y reestablecer el sistema político de Haití.

Tampoco podemos dejar de mencionar los esfuerzos conjuntos de los países de América Latina y de la OEA, en el conflicto de Bolivia y Ecuador todo lo cual se presentan como señales contundentes hacia la incipiente estructuración de una Comunidad Sudamericana de Naciones, que ya tuvo su primer expresión en diciembre de 2004 con la Declaración de Cuzco.

C) Integración Sudamericana y MERCOSUR:

Comunidad Sudamericana de Naciones, Declaración de Cuzco. El 8 de diciembre de 2004, en oportunidad de celebrarse en Cuzco, Perú la III Cumbre Sudamericana, Presidentes tomaron la decisión de conformar la Comunidad Sudamericana de Naciones, a los efectos de desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales.

El espacio sudamericano integrado tendrá como objetivo principal la concertación y coordinación política y diplomática de estrategias de política exterior entre los países de la región.

Por otro lado, promoverá la integración física, energética y de comunicaciones en Sudamérica sobre la base de la profundización de las experiencias bilaterales, regionales y subregionales existentes, con la consideración de mecanismos financieros innovadores y las propuestas sectoriales en curso que permitan una mejor realización de inversiones en infraestructura física para la región,³ y facilitará la transferencia de tecnología y de cooperación horizontal en todos los ámbitos de la ciencia, educación y cultura.

En el mes de abril de 2005, se reunieron en Brasilia los Ministros de Relaciones Exteriores de los doce países que conforman la Comunidad Sudamericana de Naciones. Uno de los objetivos principales de esta reunión fue comenzar a diseñar las pautas para concretar la primera etapa de la integración que estará dada por la "fusión" de los dos bloques de integración que conviven en la región: el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones.

El diseño de una integración de la magnitud de la que se está proyectando con la Comunidad Sudamericana de Naciones, no será de fácil concreción, máxime teniendo en cuenta la existencia de grandes asimetrías económicas entre los países miembros o las sucesiones de crisis políticas que provocan inestabilidad en la región, pero no cabe dudas, que de concretarse, será un gran desafío para los diez países de Sudamérica, más Guyana y Surinam, quienes en junto configuran un territorio de 17 millones de kilómetros

³ Se refiere fundamentalmente al proyecto de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA).

cuadrados, con alrededor de 361 millones de habitantes y un PBI de 973.000 millones de dólares. Este continente tiene el privilegio de reunir además la cuarta parte de las especies animales del mundo, el 10 % de la superficie cultivable del planeta y una de las mayores reservas de agua, gas y petróleo del mundo. Ante esta circunstancia, consideramos que sería incalculable el beneficio que podría implicar para los doce países unificar las voluntades políticas de sus gobiernos y configurar un verdadero espacio de integración comprometido esencialmente con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos; según lo establece su propia Carta de creación (la Declaración de Cuzco).

MERCOSUR. Durante la XXVIII Cumbre del MERCOSUR realizada en Asunción del Paraguay en el mes de junio de 2005, se avanzó en determinadas decisiones fundamentales para la integración como la creación del Fondo para la Convergencia Estructural y Fortalecimiento de las Instituciones del MERCOSUR (Focem), que beneficiará fundamentalmente a los países menos desarrollados, Uruguay y Paraguay, reconociendo finalmente las asimetrías del bloque.

Por otro lado, se aprobó la continuidad del diálogo con la Unión Europea y otros países o bloques económicos, tales como Sudáfrica, India y la República Popular China. Con respecto a este último país asiático, cabe mencionar su presencia cada vez más notoria en la región, destacándose las visitas oficiales que el Presidente Hu Jintao concretó en Argentina, Brasil y Chile en noviembre de 2004, en su gira sudamericana que tuvo como destino la participación en la XII Reunión de Líderes de APEC (Foro de Cooperación Asia Pacífico), en Santiago de Chile. En oportunidad de estas visitas, China obtuvo reconocimientos como "economía de mercado" de Argentina, Brasil y Chile, lo que se tradujo en un logro fundamental para una economía como la china en cuyo proceso de transformación este status es considerado como uno de los principales ejes estratégico. Asimismo, ha demostrado interés en participar en proyectos energéticos en la región sudamericana.

Finalmente, en la Cumbre se lanzó el proyecto denominado "Anillo Energético", que consta de una serie de gasoductos y líneas de alta tensión que integraría a diez países del Cono Sur. La existencia de este proyecto es una respuesta, entre motivos, a la grave crisis energética que ha afectado a la región desde aproximadamente el año 2002. Sin lugar a dudas la falta de inversión por parte de las empresas prestatarias de los servicios de energía eléctrica y gas y la pasividad con que los Estados han observado esta actitud, ha aparejado un grave problema de abastecimiento y regulación, máxime con las buenas proyecciones de crecimiento económico que pronostican los países de la región, para los cuales la energía resulta fundamental. En este contexto países como Venezuela y Bolivia juegan un papel central por ser los principales productores de petróleo y gas respectivamente.

La primera etapa del proyecto la constituye la construcción de un ducto para transportar el gas desde el Perú, más precisamente desde el yacimiento de CAMISEA- hasta Tocopilla en Chile, en un recorrido de unos 1.200 kilómetros de largo y una capacidad de transporte de unos 30 millones de metros cúbicos diarios. Éste se conectaría a otros ductos ya existentes y permitirá abastecer de gas a Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.

Como es de notar, no todos los países se beneficiarían en la primer etapa del proyecto, atento a ello Venezuela no tardó en presentar una propuesta complementaria, en virtud de la cual -y a través del financiamiento internacional que aparentemente ya contaría con

el visto bueno del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Comisión Andina de Fomento- se podría construir un gasoducto de 6.000 kilómetros el cual uniría a Venezuela, Argentina y Brasil, interconectándose con el gasoducto que propician los países del MERCOSUR.

Sin perjuicio de la importancia que este tipo de proyectos pueda traer a la región, es de destacar que el gran ausente del mismo es Bolivia, cuya diplomacia puso de manifiesto su descontento al respecto. Lo que a modo de síntesis conlleva a pensar que toda la preocupación que los países de Sudamérica han esbozado en torno a la crisis institucional, política y social que se vivió y vive en Bolivia, no tenía sino su razón profunda en una cuestión económica, basada en el menor o nulo abastecimiento de gas a los países que dependen del mismo para mantener sus niveles de crecimiento.

A modo de conclusión podemos mencionar, teniendo en cuenta los comentarios de los acontecimientos acaecidos en la región de América Latina y el Caribe, que el tema de la pobreza continúa siendo uno de los principales problemas de la región. Gran parte de las sociedades son incapaces de percibir cualquier efecto del crecimiento económico de los países y permanentemente son amenazados de transformarse en "invisibles". Que esto no ocurra es el principal desafío de los Estados de la región y también un organismo regional como la OEA que se ha comprometido a entender la nueva realidad regional y global para abordar así los problemas concretos que América Latina ha sufrido por décadas. En este partido, podría jugar también un rol preponderante la nueva Comunidad Sudamericana de Naciones, que ha reconocido entre sus fundamentos, "la pluralidad de pueblos y culturas, ha consolidado una identidad sudamericana compartida y valores comunes, tales como: la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias"; entre otros.

Finalmente queremos agradecer la colaboración recibida por parte de los Licenciados Marina Cifuentes y Gerardo Bobrovsky y de los Abogados Anabela Cravero y Hernan Esperanca quienes forman parte del Departamento de América Latina y el Caribe; los cuales han trabajado en la elaboración de la cronología y en la selección de los documentos principales que forman parte de este nuevo capítulo del Anuario 2005 del IRI. Sin su prestancia y colaboración no hubiera sido posible culminar este trabajo en un año de por sí conflictivo en la región que nos ocupa.

Abog. Laura Lucía Bogado Bordazar

Abog. Laura Maira Bono

Coordinadoras
Departamento de América Latina y el Caribe